III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

- 14103** *ORDEN de 3 de mayo de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso 315.201, interpuesto por don Marcelino Blanes Higuera.*

En el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 315.201 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, seguido a instancia de don Marcelino Blanes Higuera, contra Resolución del Ministerio de Justicia de 7 de octubre de 1985, sobre sanción disciplinaria, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado sentencia de 29 de febrero de 1988, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Primero.—Que estimando el presente recurso número 315.201, interpuesto por don Marcelino Blanes Higuera, contra Resoluciones del Ministerio de Justicia de 31 de mayo y 7 de octubre de 1985, descritos en el primer fundamento de derecho, las anulamos por ser contrarias al ordenamiento en cuanto se oponen a esta sentencia, y, en su lugar, sancionamos al recurrente como autor de una falta prevista en el artículo 8.º c), del Reglamento disciplinario de 10 de enero de 1986 (incumplimiento de deberes y obligaciones del funcionario) con apercibimiento, debiendo proceder la Administración a devolver al mismo la cantidad de 146.980 pesetas que en su día le fueron retenidas por las sanciones que aquí se anulan.

Segundo.—No hacemos mención de costas.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 3 de mayo de 1988.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

- 14104** *ORDEN de 20 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero, de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Santo Mauro, con Grandeza de España, a favor de doña Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa.*

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Santo Mauro, con Grandeza de España, a favor de doña Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa, por fallecimiento de su madre, doña Casilda Fernández de Henestrosa y Salabert.

Madrid, 20 de mayo de 1988.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

- 14105** *RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada en el recurso número 01143/84, seguido a instancia de don José Luis Magalón Martínez.*

En el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 01143/84, de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, seguido a instancia de don José Luis

Magalón Martínez, contra acuerdo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 16 de abril de 1984, que decretaba la suspensión provisional de funciones y sueldo del recurrente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo citada ha dictado sentencia de 18 de noviembre de 1985, confirmada en apelación por sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1986, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Celso de la Cruz Ortega, en nombre y representación de don José Luis Magalón Martínez, contra el acuerdo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 16 de abril de 1984, por la que se decretó la suspensión provisional de funciones del recurrente, con derecho a percibir durante su permanencia en esta situación el 75 por 100 del sueldo y la totalidad del complemento familiar, debemos declarar y declaramos que el acuerdo recurrido no infringe los artículos 17 y 24 de la Constitución española. Asimismo, por imperativo legal, debemos imponer las costas al recurrente.»

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 23 de mayo de 1988.—El Director general, José Manuel Blanque Avilés.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

- 14106** *ORDEN 413/38388/1988, de 9 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 14 de febrero de 1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Bienvenido Briz López.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, don Bienvenido Briz López, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre retribución de Caballero Mutilado, se ha dictado sentencia con fecha 14 de febrero de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Grandó Weil, en nombre y representación de don Bienvenido Briz López, contra la resolución tácita del Ministerio de Economía y Hacienda, tras haber denunciado, en tiempo y forma, la mora, por las que se desestimaba la petición del actor, en su condición de Caballero Mutilado Permanente, de percibir las retribuciones básicas en la misma cuantía establecida para los de su mismo empleo en situación de actividad; debemos declarar y declaramos la conformidad de las resoluciones recurridas con el ordenamiento jurídico. Sin costas.

Esta resolución es firme, y frente a la misma no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 9 de mayo de 1988.—P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.